

INTEGRACIONES REGIONALES Y NUEVAS ALIANZAS

Rosario Green*
Biarritz, 28 de octubre, 2004

Introducción

Hablar de integraciones regionales nos remite, casi de inmediato, a mirar la fotografía del contexto internacional hoy. Éste se encuentra caracterizado, por un lado, por la existencia de sólidos bloques que pueden perseguir metas y objetivos a menudo disímbolos aunque no necesariamente incompatibles, como serían la seguridad (OTAN), la cooperación económica (APEC), el comercio y la inversión (NAFTA), la integración holística (Unión Europea, MERCOSUR); y por el otro, por la presencia de un poder prácticamente omnímodo que busca imponer su propia visión del mundo y con ella, necesariamente, su agenda.

La referencia a nuevas alianzas, en cambio, abre la puerta a la esperanza. En el fondo se trata de imaginar una nueva fotografía; una que no sea tan contundente; una en la que sea posible tender puentes; una que, en suma, acote el poder de los poderosos.

Ante la imposibilidad de hacer un repaso exhaustivo de una y otra fotografía, me concretaré a describir la situación en el Continente Americano, donde coexisten esos dos tipos de fortaleza: por una parte en ese Hemisferio radica el poder supremo; por la otra, es justamente en esas tierras donde se han intentado diversos experimentos, unos más exitosos que otros, pero ninguno capaz de sustraerse ni al peso de la geografía ni al de las ambiciones hegemónicas.

1. Dos mitades, dos visiones.

América Latina ha esperado por décadas colocarse como la prioridad más importante de la política exterior de Estados Unidos, a partir no sólo de su

* Actual Embajadora de México en Argentina, Ex Canciller, Ex Subsecretaria General de Naciones Unidas.

ubicación geográfica sino también como retribución a su tradicional solidaridad con los temas estadounidenses de seguridad.

Sin embargo, esas expectativas latinoamericanas a menudo se han visto frustradas por acontecimientos que escapan a su control. Así sucedió después de la segunda Guerra Mundial cuando su alineamiento a Estados Unidos no sólo no fue recompensado con los ansiados recursos financieros para respaldar su desarrollo, sino que la región permanecería al margen de este tipo de asistencia mientras que Washington, por su parte, diseñaba el Plan Marshall para la reconstrucción europea, canalizando a esa área geográfica todo su apoyo.

La aspiración latinoamericana que en tanto que aliada regional buscaba convocar mayor interés estadounidense respecto a sus necesidades, volvería a verse postergada más adelante cuando Estados Unidos centró su preocupación principalmente en Asia, buscando con ello contener el avance del comunismo internacional. Dado además el hecho de que en América Latina predominaban por entonces regímenes militares o civiles que se definían como ferozmente anticomunistas, la ausencia de una amenaza ideológica en esta zona justificaba de alguna manera la falta de atención del gigante del norte.

La caída del muro de Berlín años más tarde, tampoco habría de traer consigo un significativo cambio de actitud por parte de Estados Unidos hacia América Latina, debido a dos razones principales. Por un lado, porque era necesario apoyar la conversión al capitalismo de las economías de Europa del Este. Por el otro, porque aunque en 1990 la administración republicana de George Bush padre (1989-1993), intentó un planteamiento de política latinoamericanista que tuviera como objetivos fundamentales estimular el flujo comercial, incrementar la inversión extranjera en la zona y reducir el endeudamiento externo, esta denominada "Iniciativa de las Américas" no llegó a consolidarse. Los apremios en otra región del planeta volvieron a posponer a América Latina. En esta ocasión se trató de la crisis entre Iraq y Kuwait, la invasión de este último por el primero el 2 de agosto

de 1990, y el llamado de Saddam Hussein a emprender una “guerra santa” contra Estados Unidos.

Años más tarde, sin embargo, la propuesta de diseñar una política específica de Washington hacia América Latina se convertiría en uno de los objetivos de una administración de distinto signo al de quien la propusiera. El gobierno demócrata de William Clinton (1993-2000), colocó esta idea en el centro de la discusión de la Primera Cumbre de las Américas realizada en 1994 en la ciudad de Miami, Florida, con el fin de comprometer a los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes (34 en total) a iniciar negociaciones para establecer, a partir del 2005, un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que incluiría a los 800 millones de habitantes del espacio comprendido entre Alaska y Tierra del Fuego.

De entonces a la fecha, otros tres encuentros de este mismo tipo se han llevado a cabo: una segunda Cumbre todavía de sello demócrata en Santiago de Chile, en 1998; la Tercera, realizada en el 2001 en Québec, Canadá, con la asistencia ya del Presidente republicano George W. Bush, hijo de quien concibiera el esquema; y otra más, considerada como extraordinaria, realizada en Monterrey, México en el 2004. Además de esta diplomacia cimera, no han faltado reuniones de todo tipo, tanto a nivel ministerial como técnico, pero a pesar de todo ello, la meta del año 2005 no parece posible, como tampoco parece claro el entusiasmo de un buen número de países que cuando se inició este largo proceso se mostraban mucho más comprometidos con él. Y esto sin entrar en los temas que, en estos momentos, convocan la atención no sólo de los estadounidenses y los latinoamericanos, sino del mundo entero: ¿quién ganará la elección del dos de noviembre y qué repercusiones tendrá este resultado?

Las razones que podrían ayudar a entender el desencanto de América Latina con la propuesta estadounidense de 1994 tienen que ver, por un lado, con el hecho de que entre los 34 socios potenciales del bloque existen diferentes visiones sobre lo que el ALCA debería ser: para algunos basta con obtener algún tipo de acceso

preferencial al mercado de Estados Unidos (una suerte de ALCA “*light*”); para otros es *sine qua non* el compromiso por parte de la Unión Americana de eliminar los subsidios a sus productos agrícolas y otras prácticas de efecto equivalente, que sacan de la competencia a los bienes latinoamericanos; y no falta quienes, en el extremo, sostengan que el ALCA debe ser un ejercicio integrador más “a la europea”, con fondos de estructura y de cohesión, y libre circulación no sólo de mercancías, servicios e inversiones sino también de personas. Por otro lado, esa desilusión está también vinculada a la toma de conciencia por parte de la región de que aun las expectativas más optimistas acerca de un Presidente que, como George W. Bush, se autodefinía como latinoamericanista, no pudieron prever ni los terribles acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 ni su impacto sobre el diseño de la política continental estadounidense.

El compromiso del Presidente Bush de “mirar hacia el sur, no en forma residual sino fundamental”, desapareció del radar de la política exterior de Estados Unidos luego del inconcebible ataque terrorista a las ciudades de Nueva York y Washington. El combate al terrorismo pasó a ocupar la primerísima prioridad no sólo de ese país sino del mundo en general. Washington se aprestó a lanzar una contraofensiva que inclusive fue más allá de Afganistán, desde donde supuestamente operaba el instigador de tal agresión, Bin Laden, para alcanzar a Iraq y, de manera especial, a su líder Saddam Hussein, capturado en territorio iraquí por las tropas de ocupación, a finales del 2003.

Por cierto que la “invasión punitiva” a Iraq, decretada por Washington y apoyada por el Reino Unido, al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el pretexto de que el país contaba con armas de destrucción masiva, cuestión por entonces puesta en duda por los propios informes de los inspectores de la ONU y hoy absolutamente descartada, escindió a la comunidad internacional y asestó un duro golpe tanto al bilateralismo como al regionalismo y, por supuesto, al multilateralismo.

En el caso de América Latina, la denominada “guerra preventiva” de Estados Unidos contra Iraq tuvo especiales repercusiones. Por un lado, dividió a la región pues mientras países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y República Dominicana se colocaron al lado de la coalición, los demás objetaron la agresión. Por el otro, la distanció de Washington con consecuencias diversas para las distintas naciones. Para México y Chile, por entonces con un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad y una clara oposición a la forma como Estados Unidos pretendía lidiar con el conflicto, esta postura significó la interrupción o la dilación, al menos, de los diálogos bilaterales que en aquellos momentos se encontraban en marcha: el migratorio en el primer caso y el comercial en el segundo (ambos se retomarían, por cierto, más adelante). Para el resto de los países latinoamericanos que también se manifestaban en contra de esa guerra decretada unilateralmente, el mensaje quedó claro: habría colaboración sólo si ésta era de doble vía. Para Washington, algunos de los contenidos de esa cooperación tenían que ver con la garantía de impunidad para sus efectivos involucrados en operaciones militares, a fin de retraerlos a la eventual jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Otros estarían vinculados a temas más bien económicos, principalmente la aceptación del ALCA. Y otros más a cuestiones políticas: combate al narcotráfico, respeto a los derechos humanos, apoyo a la reconstrucción de Iraq, etc.

Dados estos desencuentros tanto de visión como de acción entre Estados Unidos y América Latina vale la pena preguntarse si es dable esperar una relación no sólo más estrecha, fraterna y solidaria entre Estados Unidos y América Latina, sino también más estable, más permanente, menos sujeta a la coyuntura. Particularmente resulta fundamental imaginar, aun a riesgo de equivocarse, cuál será la relación entre las dos mitades del Hemisferio si se reelige George W. Bush o si gana John F. Kerry.

La verdad es que en vísperas de que se realice la elección presidencial en Estados Unidos, y a juzgar por lo que escuchamos a lo largo de los debates entre

ambos candidatos, al intentar evaluar la prioridad que en sus respectivas plataformas de política exterior pareció ocupar América Latina, la respuesta es que lamentablemente ninguna.

Cierto, la subregión no estuvo totalmente ausente de la mirada republicana o demócrata ya que después de todo compartimos el Continente. Pero debemos resignarnos o tal vez regocijarnos de la contundente percepción de un hecho: no somos vitales, no nos tienen en la mira, podemos ser nosotros mismos, hacer lo que más nos convenga, dentro de ciertos límites claro, porque ni siquiera la libertad es o debiera ser para nadie ilimitada.

Los latinoamericanos compartimos con Estados Unidos el espacio geográfico en el que habitamos. Acompañamos sus “valores occidentales”. Tenemos visiones compartidas sobre un buen número de asuntos como la necesaria erradicación de la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, el hambre y la enfermedad, para mencionar sólo algunos de los más desgarradores. Estamos en contra de las drogas, el terrorismo y muchos males que nos afectan indiscriminadamente. Pero también nos manifestamos contra las armas de destrucción masiva, se ubiquen donde se ubiquen, no en balde América Latina es la primera zona desnuclearizada del planeta, y ahí empiezan las diferencias porque nuestro desacuerdo con ese tipo de armamentos pasa también por Estados Unidos que lo tiene en abundancia. Y eso para no mencionar otros temas donde existen también desencuentros como son los casos de la protección del medio ambiente y el Protocolo de Kyoto; o los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares y la Convención de Naciones Unidas al respecto, para mencionar sólo un par de ellos.

Ante ese panorama, ¿qué novedades creativas y favorables pueden Bush y Kerry ofrecerle a América Latina si el primero se reelige o si gana el segundo? Me temo que la respuesta es la misma que la del párrafo anterior: ninguna. Pese a lo que creen los optimistas que señalan que si gana Kerry, América Latina encontrará el respeto y la cooperación que merece por parte del norte continental, o aquellos que sostienen que Bush ansía resolver el tema de la guerra en Iraq para poder

consolidar el ALCA que heredara de su padre, es un hecho que para ambos contendientes lo fundamental es lo doméstico y, en ese sentido el tema central es la seguridad de su propio país, cuestión acerca de la cual, ya se señalaba, no siempre ha habido acuerdo entre las dos mitades del Continente Americano.

En este escenario de desencuentros, no debe sorprender que un cierto sentimiento antiestadounidense haya ido ganando terreno en América Latina según lo demuestran no sólo diversas encuestas de opinión sino reconocidos estudiosos del tema. Por ejemplo, por un lado, la conocida empresa chilena Latinobarómetro muestra que después de la guerra contra Iraq más del 80% de los latinoamericanos encuestados confesó tener una opinión negativa del Presidente Bush. Por el otro, recientemente el profesor Alan L. McPherson publicó un libro que en español podría llamarse: “Fuera yanquis: el sentimiento antiestadounidense en las relaciones de Estados Unidos y América Latina”, donde el tema de las emociones contradictorias que en los latinoamericanos genera el unilateralismo del poderoso país, por una parte, y sus películas y comida rápida, por la otra, es tratado con cuidado y seriedad y presentado, básicamente, como “una expresión de repudio contra la excesiva influencia de Estados Unidos en el resto del mundo”. En el fondo, hay pues coincidencia entre los indicadores de opinión y quienes a través de sus análisis ayudan a generarla: ante desigualdades de poder tan importantes como las que existen entre las dos mitades del Hemisferio, la respuesta de los débiles es el rechazo de los poderosos.

2. América Latina frente a sí misma: una experiencia integracionista en marcha.

A lo largo de los últimos cuarenta y cinco años han sido diversos los esfuerzos latinoamericanos de integración económica, como también desde los años ochenta de la pasada centuria varias han sido las oportunidades en las que América Latina ha buscado resolver sus problemas “latinoamericanizándolos”. Para superar el olvido al que en ocasiones se condena a estos esfuerzos, para

remontar la trivialidad con la que a veces se les acusa de incompletos, resulta necesario hacer aunque sea un breve comentario en torno a ellos, con el único ánimo de resaltar el hecho de que existe en la región una fuerte vocación de encuentro y unidad, pese a que no han sido pocos, lamentablemente, los momentos también de desencuentro.

a) Una primera referencia al que puede denominarse “el proceso latinoamericano integracionista en marcha”, tiene que ver con los distintos esquemas de integración económica de América Latina y al estado que guardan:

- El Mercado Común Centroamericano (MCCA)

Probablemente el esquema de integración económica más antiguo de América Latina sea el Mercado Común Centroamericano (MCCA) que agrupa a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y se rige por el Tratado de Managua de 1960 y sus protocolos modificatorios. La sede de su Secretaría General (SIECA) está en San Salvador, El Salvador, y su marco institucional se compone del Consejo Económico Centroamericano (integrado por los Ministros de Integración) y el Comité Ejecutivo de Integración Económica (conformado por los viceministros). Cuenta además con una Corte Centroamericana de Justicia y su estructura se ve reforzada por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El MCCA constituye una unión aduanera imperfecta porque aunque existe comercio libre entre todos sus integrantes, excepto por Costa Rica que se está incorporando paulatinamente, ha sido difícil instrumentar un arancel externo común único. Sin embargo, tiene el mérito de que su concepción marcó un hito en Latinoamérica no sólo por lo temprano de su planteamiento sino por el tipo de movimiento unionista al que dio lugar en la región. No puede negarse que a su favor contaba la tradición, ya que al consolidar su independencia en 1821 y dejar de ser colonias españolas formaron, primero, la República Federal de Centroamérica (1824-1838), y al desaparecer ésta, la Confederación Centroamericana (1842) que no prosperó ante la imposibilidad de vincular a las

cinco naciones (ni Guatemala ni Costa Rica quisieron unirse). La búsqueda en pro de su integración continuaría hasta llegar a 1960 y la creación del MCCA, el cual aunque se mantiene vigente en la actualidad y es de esperarse se consolide y triunfe en las metas que se ha propuesto, tampoco habría de darse sin tropiezos.

En 1969 un partido entre las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras serviría de pretexto para desatar un serio conflicto que se agravó rápidamente hasta convertirse en la llamada “guerra del football” que puso en jaque al proyecto integrador. A pesar de todo, hacia finales de la década de los setenta los países centroamericanos habían alcanzado un comercio recíproco equivalente a una cuarta parte de sus exportaciones totales. Además, se había construido una infraestructura común y existían relaciones entre sus mercados y empresarios. Pero una nueva tormenta se cernía en el horizonte.

A lo largo de prácticamente todo el decenio siguiente, la inestabilidad política en la mayoría de los países de la subregión, así como las tensiones que se crearon entre ellos y el hecho de haberse convertido en un centro de conflictos de alcance internacional, conformaron una situación totalmente adversa a los esfuerzos de integración. El comercio intrazonal se desplomó y mucho de lo ganado se perdió. Sin embargo, una vez superadas en lo esencial las crisis políticas, la reanudación del proceso de integración se dio con relativa rapidez. Hoy no sólo se han recuperado los niveles de comercio, sino que el MCCA busca su ampliación. Tiene el proyecto de crear una zona de libre comercio que incorpore a Panamá y muestra interés en acercarse a Belice y a la República Dominicana. Además, todos los miembros del MCCA, con excepción de Costa Rica, trabajan afanosamente para concluir pronto un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

- La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

El mismo pensamiento integrador que inspiró la constitución del MCCA alentó, casi simultáneamente, la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre

Comercio (ALAC). Para ello firmaron su carta constitutiva, conocida como Tratado de Montevideo de 1960, Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se sumarían Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Las importantes disparidades entre los miembros de la ALAC hicieron prácticamente imposible su consolidación, pero su fe en la integración los llevó a modificar su estructura mediante la firma de un nuevo Tratado de Montevideo en 1980 y la constitución de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Su sede está en Montevideo, Uruguay y cuenta con una Secretaría General que es su órgano técnico, un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, una Conferencia de Evaluación y Convergencia, y un Comité de Representantes usualmente integrado por los embajadores ante el gobierno de la República Oriental. Aunque su meta de largo plazo es llegar a constituir un mercado común, en lo inmediato sus objetivos son la regulación del comercio recíproco, la complementación económica y el desarrollo de la cooperación, todo ello con el fin de coadyuvar a la ampliación de sus mercados. En el fondo se trata de establecer un área de preferencias económicas a partir de una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceras naciones; de Acuerdos de Alcance Regional, comunes a la totalidad de los miembros; y de Acuerdos de Alcance Parcial, con la participación de dos o más países del área.

A fin de no volver a cometer los errores de la ALAC, la ALADI reconoce que existen distintos grados de desarrollo entre sus actuales 12 miembros y con base en ello registra tres categorías de naciones, otorgándoles tratamientos diferenciales en la aplicación de los mecanismos de liberalización comercial según el tipo de país de que se trate: de menor desarrollo relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay); de desarrollo intermedio (Colombia, Cuba -país que se incorporó a finales de la década de los noventa-, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela); y los demás, porque serían los “grandes” (Argentina, Brasil y México).

Dado que la ALADI da cabida en su estructura jurídica a importantes acuerdos subregionales como la Comunidad Andina de Naciones, el MERCOSUR, el Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela), etc., le corresponde desarrollar acciones tendientes a apoyar y fomentar las alianzas con el fin de hacerla converger progresivamente hacia un espacio económico común. Es decir, la meta es en verdad la integración económica de América Latina.

- La Comunidad Andina de Naciones (CAN)

En 1969 se fundó el Pacto Andino mediante la firma del Acuerdo de Cartagena por parte de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Con él se perseguía liberar el comercio entre sus miembros, protegerlos frente al exterior mediante un arancel común, desarrollar un programa industrial conjunto, armonizar sus políticas económicas y lograr una integración física plena. Si bien durante sus primeros diez años de funcionamiento su estructura institucional se consolidó y hasta se modificó su membresía (en 1973 se unió Venezuela y por esas fechas Chile solicita su baja), el tema arancelario tanto intra como extrazonal avanzó realmente muy poco y las otras metas quedaron también muy rezagadas. Más aún, la década de los ochenta no sólo no registró mayores logros, sino que incluso el comercio entre las naciones del Pacto disminuyó notablemente, por lo que en el siguiente decenio se decidió redoblar los esfuerzos. El primer resultado fue que la zona de libre comercio iniciada en 1969 finalmente pudo concluirse en 1993, cuando prácticamente todos sus integrantes (con la excepción de Perú que progresó más lentamente) liberaron los productos de su universo arancelario. El segundo, la constitución de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que inició sus funciones en agosto de 1997.

El soporte de la CAN está constituido por sus cinco países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), y los órganos e instituciones del denominado Sistema Andino de Integración (SAI): Consejo Presidencial Andino, Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión de la Comunidad

Andina (integrada por los Ministros de Comercio), Secretaría General, Tribunal de Justicia, Parlamento Andino, Consejo Consultivo Empresarial, Consejo Consultivo Laboral, Corporación Andina de Fomento, Fondo Latinoamericano de Reservas, Convenio Andrés Bello (para la educación, la ciencia y la cultura), Convenio Hipólito Unanue (salud), y Convenio Simón Rodríguez (para el mejoramiento integral de las condiciones de vida y de trabajo).

Es interesante notar que la mística integradora de esa subregión ha perdurado pese al surgimiento de acontecimientos políticos graves tanto al interior de los países de la CAN, como entre algunos de sus integrantes: desde el recrudecimiento de las hostilidades entre Ecuador y Perú, hasta las dificultades que la narcoguerrilla plantea en Colombia, pasando por los problemas a los que se ha enfrentado en Venezuela el gobierno del Presidente Chávez, y los complicados recambios en el liderazgo político en Ecuador, Perú y Bolivia. Probablemente el hecho de que sus Jefes de Estado continúan reuniéndose cada seis meses desde 1989, por un lado, y la aspiración de ese conjunto andino de naciones de eventualmente incorporarse a un esquema integrador más amplio como el MERCOSUR, con miras a eventualmente formar parte de una América del Sur integrada y más fuerte, por el otro, son parte fundamental de ese tejido que parece amalgamarlos a pesar de los obstáculos que han debido sortear y la persistencia de muchos de sus problemas.

- El Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

La idea de un Mercado Común del Sur (MERCOSUR) surgió en 1991 cuando sus cuatro miembros originales: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, aunque debe reconocerse como importante antecedente la conciliación de las tradicionales diferencias políticas entre sus dos integrantes más importantes mediante la suscripción del Acta para la Integración de Argentina y Brasil de 1986.

Al principio se pensó fundamentalmente en constituir una zona de libre comercio, estimulada por la liberalización arancelaria gradual, lineal y automática entre sus miembros. En 1995 se acordó, sin embargo, que este esfuerzo debería complementarse mediante la introducción de un arancel externo común, iniciándose con ello la construcción de una unión aduanera. Se adoptaron además decisiones que empezaron a dirigir la atención de los Estados miembros a temas relacionados con los servicios, el tránsito de personas, la coordinación de políticas, etc., iniciándose la larga marcha hacia un mercado común que si bien ha exhibido importantes momentos de importante fuerza y dinamismo, ha debido igualmente sortear grandes dificultades particularmente al interior de cada una de sus realidades sociales.

Pese a todo, se insiste, este esfuerzo integrador se mantiene a partir tanto de la voluntad de sus miembros y su convicción de que juntos pueden aspirar a un futuro mejor, como del hecho incontrovertible de sus dimensiones continentales: se trata de un área de cerca de 12 millones de kilómetros cuadrados, un mercado potencial de poco más de 200 millones de personas, y un Producto Interno Bruto (PIB) acumulado de más de 600 mil millones de dólares. Estas cifras ubican al área integrada entre las cuatro economías del mundo, inmediatamente después del conjunto integrado por los países miembros del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el de la Unión Europea (UE), y Japón.

La sede del Mercado Común del Sur se encuentra en Montevideo y su principal órgano normativo es el Consejo de Mercado Común integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía. Su órgano ejecutivo es el Grupo Mercado Común compuesto por los representantes de los dos ministerios a los que se ha hecho referencia más los de sus bancos centrales. Otros órganos son la Comisión de Comercio del MERCOSUR, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo Económico Social, y la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. Existen además otros órganos sin capacidad decisoria. La presidencia de MERCOSUR es rotativa y dura seis meses.

Además, de sus miembros fundadores, el Mercado Común del Sur cuenta con tres “países asociados”: Bolivia, Chile y Perú, y recientemente México y Venezuela han manifestado su intención de hacer lo mismo, una vez cumplido el requisito indispensable para lograrlo: la firma de un acuerdo de libre comercio con el núcleo de los cuatro.

b) Una segunda referencia obligada cuando se discute la integración latinoamericana como un proceso que va mucho más allá de lo económico, es la que tiene que ver con sus experiencias en el ámbito de la solución de conflictos regionales o lo que es lo mismo, la “latinoamericanización” de las respuestas de América Latina a sus problemas políticos.

- Nicaragua y el Grupo de Contadora

En 1979, después de largos años de dictadura somocista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), constituido más de tres lustros atrás (1961), asumió el poder en Nicaragua. Muy pronto las medidas adoptadas por la Junta de los cinco comandantes que integraron el gobierno en esa época, habrían de generar un importante desencuentro con Estados Unidos, antiguo aliado de Anastasio Somoza asesinado en 1980 en Paraguay, donde se habría exiliado al triunfo de la Revolución sandinista. Con el argumento de que Washington estaba sumamente preocupado por un supuesto viraje cada vez más hacia a la izquierda por parte de los comandantes así como por las alianzas de Nicaragua con países socialistas, particularmente la URSS, el gobierno estadounidense empezó a apoyar a los denominados “contras”. Esta situación se mantuvo en mayor o menos medida incluso después de que Daniel Ortega ganara las elecciones presidenciales. A Washington le seguía inquietando la postura ideológica del líder y auspiciaba, o pretendía ignorar, las múltiples acciones desestabilizadoras que cotidianamente se registraban en ese país, agravaban la situación política y hacían prácticamente indispensable algún tipo de mediación externa.

Ante el riesgo de que lejos de solventarse ese desencuentro se profundizara, y conscientes del impacto negativo que esto traería sobre el resto de la región, incluidos sus propios países ubicados en el mismo entorno caribeño, los gobiernos de México, Panamá, Colombia y Venezuela decidieron constituir, el 4 de enero de 1983, el denominado Grupo de Contadora. Su objetivo era doble: por un lado, mantener a distancia la posible injerencia estadounidense y, por el otro, resolver el diferendo entre quienes creían que la pacificación de Nicaragua debía ser materia de tratamiento por parte de la OEA y aquellos que opinaban que era competencia de la ONU.

Sin embargo, las repercusiones de los acontecimientos nicaragüenses sobre sus vecinos centroamericanos y la dinámica política al interior de varios de ellos, ampliaron y profundizaron la agenda del Grupo de Contadora, haciendo inclusive indispensable su prolongación en el tiempo. Como consecuencia de esto, después de varios años de trabajo el Grupo debió enfrentar tanto la fatiga como su virtual estancamiento. Se hacía necesario revitalizarlo y hasta empezar a pasar la estafeta a los propios centroamericanos. Los acuerdos de Esquipulas y el incremento en la membresía de Contadora para incluir a Argentina, Brasil, Chile y Perú (Grupo de Apoyo), transformaron al Grupo en una instancia mucho más flexible, modificaron su temario e incluso le cambiaron el nombre, estableciéndose así el denominado Grupo de los Ocho que más tarde constituyó, con la adición de Bolivia, Paraguay, Uruguay, un representante de Centroamérica y uno del Caribe inglés, el conocido Grupo de Río.

Ese Grupo se encuentra hoy integrado por México, todos los países de Centro y Sudamérica, República Dominicana, y una nación que encarna al Caribe anglófono. Sus líderes se reúnen anualmente desde 1987 para tratar temas regionales e internacionales, y a menudo sus posiciones han servido como focos de alerta temprana, permitiendo desalentar situaciones que podrían haber tenido consecuencias aún más catastróficas. Así sucedió, por ejemplo, cuando los Mandatarios del Grupo reunidos en Costa Rica para celebrar su décima sexta

Cumbre se pronunciaron con dureza ante los acontecimientos que paralelamente ocurrían en Venezuela, donde un golpe de Estado contra el Presidente Constitucional, Hugo Chávez, lo mantuvo separado de su encargo por unas horas entre el 11 y el 12 de abril del 2002, justamente mientras el encuentro de San José se llevaba a cabo.

- El Salvador y el Grupo de Amigos del Secretario General de la Naciones Unidas

La cruenta guerra civil en este país centroamericano pronto habría de ponerlo en el ámbito de acción de la ONU. Conforme la confrontación entre los Frentes y el Gobierno salvadoreño se agudizaba, el entonces Secretario General de la máxima Organización mundial, Javier Pérez de Cuellar, convocó a México, Colombia, España y Venezuela a integrar el Grupo de Amigos a fin de auxiliarlo en el logro de una mediación exitosa. Después de varios años y arduo trabajo, el Grupo de Amigos del Secretario General consiguió que las Partes se comprometieran con los Acuerdos de Paz que fueron signados en el Castillo de Chapultepec, el 16 de enero de 1992.

Sin menoscabar la extraordinaria importancia de los Acuerdos que en El Salvador pusieron fin a una larga y violenta contienda interna, debe resaltarse que la experiencia mediadora de los países de América Latina participantes en el Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU, marcó un hito para el regionalismo latinoamericano. Mostró que, sin darle la espalda a las organizaciones oficiales de vocación multilateral y regional, es posible permitir que otras fuerzas positivas operen de manera casi natural y tengan éxito.

- Guatemala y el Grupo de Amigos del Proceso de Paz

Las largas décadas de enfrentamiento entre guatemaltecos, ubicaron el tema de la paz y la reconciliación nacionales en la agenda de la ONU. A diferencia de lo que

había sucedido en el caso de El Salvador, en esta ocasión el Grupo de Amigos que en 1993 se integró con la participación de México, Colombia, España, Estados Unidos, Noruega y Venezuela, más que inscribirse en la órbita de Boutros-Ghali, por entonces Secretario General de la máxima Organización mundial, se concibió como uno de apoyo al proceso negociador propiamente dicho. Se trataba de construir un corredor que facilitara el tránsito de las propuestas del gobierno guatemalteco a la URNG y viceversa, en un universo en el que había demasiados jugadores: el gobierno, la guerrilla, la iglesia, la sociedad civil, la ONU, la OEA, y los países vecinos, incluido México donde la comandancia de la URNG habitaba.

El Grupo de Amigos del Proceso de Paz de Guatemala nunca pretendió constituirse en instancia negociadora. Su trabajo al lado de la ONU y de las Partes en contienda fue posible justamente por esa connotación. De esta forma, una vez tendidos los puentes con el apoyo del Grupo, la representación del Secretario General pudo asumir su relevante papel mediador. Finalmente, después de varios años, tanto largos como difíciles, el 29 de diciembre de 1996 se rubricó en la ciudad de Guatemala el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno y la URNG que demostró que las armas de la política y no las de la confrontación, habían ganado la batalla.

Justo es señalar que este regionalismo latinoamericano, o esta mediación regional en diversos conflictos suscitados en América Latina, no se redujo a Centroamérica. Existieron otros ejemplos de conciliación política que involucraron a algunos países sudamericanos, bien porque se trató de vecinos, bien porque eran socios de un acuerdo como el MERCOSUR, o bien porque son garantes de un determinado tratado de paz. En ese sentido sobresalen los casos de la guerra entre Perú y Ecuador en 1995, y los acontecimientos registrados en Paraguay en 1998.

- El conflicto del Alto Cenepa

Durante los 33 días transcurridos entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995, las fuerzas armadas de Perú y Ecuador libraron un enfrentamiento muy cruento en la Cordillera del Cóndor, en la región ribereña del Alto Cenepa. Una vieja herida limítrofe que se pensaba zanjada por el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942, volvió a sangrar. Ahora se trataba de la demarcación de una línea fronteriza de unos 78 kilómetros en plena selva amazónica. Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, en tanto que países garantes de ese Tratado, se pusieron en alerta.

Los tres países latinoamericanos que habían avalado la paz entre esas dos naciones vecinas estaban profundamente conscientes de que era urgente contener el conflicto antes de que éste se desbordara, en particular a la luz de los difíciles momentos por los que América Latina atravesaba: no sólo las consecuencias de la crisis financiera mexicana sino también la pérdida de confianza de los inversionistas extranjeros en la región como un todo. Así, ofrecieron de inmediato sus buenos oficios e iniciaron su participación en un proceso que lograría un primer éxito el 17 de febrero con la firma del Acuerdo de Paz de Itamaraty, nombre con el que se conoce a la Cancillería brasileña. Mediante este documento se confirmaba el cese de hostilidades decretado unilateralmente días antes por el gobierno peruano, y se convenía en el envío de una misión de observadores militares a la zona del conflicto.

Lo anterior, sin embargo, no impidió que la guerra continuara y no fue sino hasta el 27 de ese mes que los observadores de los países garantes llegaron a Bagua (Perú) y Patuca (Ecuador) para verificar el alto al fuego y la separación de fuerzas según lo estipulado en el Acuerdo de Paz de Itamaraty. Pese a unas expresiones finales de belicosidad, al día siguiente los Cancilleres de Perú y Ecuador firmaron la Declaración de Montevideo, que ratificó el multicitado Acuerdo de Paz de Itamaraty y puso fin al conflicto del Alto Cenepa. La guerra le habría costado a

Perú 58 muertos, 107 heridos y 5 desaparecidos a los que habría que sumar las bajas sufridas por Ecuador: por lo menos 39 muertos y 65 heridos. Las pérdidas materiales fueron también cuantiosas para ambos países. La única ganancia, si es posible utilizar un término como ese en este contexto, fue el fortalecimiento del regionalismo y subregionalismo en tanto que instancia mediadora.

- El caso de Paraguay

Cuando el 3 de febrero de 1989 un golpe de Estado derrocó al dictador Alfredo Stroessner, quién llegó al poder en 1947 después de la “revolución de los pynandí” (pies descalzos o pobres), concluyó la más larga dictadura no sólo paraguaya sino de toda América Latina. A partir de ese momento, se sancionó y entró en vigor una nueva Constitución y empezaron a celebrarse comicios regulares.

Pese a las enormes dificultades económicas, la democracia sobreviviría en ese país sureño hasta que empezaron los enfrentamientos entre el General Lino Oviedo, jefe de las Fuerzas Armadas, y el Presidente Juan Carlos Wasmosy, vencedor de las elecciones de 1993.

En 1996 Wasmosy alejó del ejército a Oviedo bajo la acusación de querer encabezar un golpe en su contra, y un año más tarde lo hizo encarcelar y enjuiciar por un tribunal militar, inhabilitándolo así para la contienda presidencial de 1998, aun y cuando el General habría ganado las internas del Partido Colorado; el mismo del Presidente. En su lugar, Raúl Cubas, considerado el delfín político del General, fue electo Presidente y el Doctor Argaña, rival de Oviedo y por entonces aliado de Wasmosy, fue designado Vicepresidente.

El Presidente Cubas indultó a Oviedo y los “colorados” de la facción Wasmosy-Argaña, junto con los partidos de oposición, obtuvieron de la Corte Suprema una anulación del indulto que Cubas no acató. Quienes buscaron entonces enjuiciar políticamente al Presidente no lo lograron y para 1999 la situación política en

Paraguay era francamente explosiva. En marzo, el Vicepresidente Argaña fue asesinado y la oposición culpó a Oviedo movilizándolo a un número importante de manifestantes a fin de reavivar el juicio político contra Cubas. La protesta degeneró en violencia, siete manifestantes fueron asesinados y el 28 de marzo Cubas renunciaba y se asilaba en Brasil al tiempo que Oviedo lo hacía en Argentina. Luis González Macchi, Presidente del Congreso, juraba esa misma noche como el nuevo Presidente la República de Paraguay.

Al resultado anterior no se llegó sin la amenaza de una injerencia extrazonal, pero fue vital la participación de los otros tres países miembros del MERCOSUR que no estaban dispuestos a permitir que uno de sus asociados se saliera del esquema democrático ya para entonces francamente consolidado en el Sur de América Latina. Aunque tanto Brasil como Argentina se habían prestado a recibir a Cubas, en el primer caso, y a Oviedo, en el segundo, una condición tácita enmarcó ambos asilos: el MERCOSUR debía mantenerse como un conjunto de países vinculados no sólo por una comunidad de intereses sino también por una de principios. Ahí radicó la mediación subregional, menos formal tal vez que en los otros casos aquí citados, pero no por ello menos importante.

3. ¿El NAFTA como un ensayo de encuentro entre las dos mitades del Continente Americano?

Cuando en junio de 1991 México inicia formalmente negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, lo hace a pesar de un número importante de factores que podían presagiar más fracasos que éxitos. En primer lugar, sus diferencias en términos territoriales, de recursos y de ingresos con respecto a sus dos vecinos del norte. En segundo lugar, los riesgos de confrontar el arraigado nacionalismo mexicano con la institucionalización de una vinculación mucho más intensa con los que serían sus nuevos socios. En tercer lugar, su relativamente nueva política de apertura comercial, habiéndose incorporado al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT por sus siglas en

inglés) muy tardíamente (1986), cuestión a la que se aunaba su escasa experiencia en ese tipo de tratativas.

Aun si argumentos como los esgrimidos en el párrafo anterior podían haber desalentado el avance de las negociaciones, registrándose de hecho un ácido debate a nivel nacional en torno a las ventajas y desventajas de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA como también se le conoce), el gobierno de México perseveró en sus esfuerzos debido a que tenía poderosas razones para seguir adelante. Sobresalía, por un lado, la necesidad de hacer *de jure* lo que ya era *de facto*, particularmente con Estados Unidos: una creciente integración entre el norte de México y el sur de ese país, que se daba no sólo de manera “silenciosa” sino en ausencia de reglas del juego claras y mutuamente provechosas. Por otro lado, estaba la contundencia de los más de 3 mil kilómetros de una frontera porosa, problemática y difícil de atender al margen de un esfuerzo más amplio. También estaba presente la percepción de que vecindad y dependencia son factores que pueden operar tanto en pro como en contra, y la decidida apuesta gubernamental a favor del primer resultado. Finalmente, la aceptación de que negociar el TLCAN era para México la opción más viable dados no sólo la inmediación geográfica y el peso de Estados Unidos, sino también el hecho de que existía la impresión de que Europa no tenía mayor interés en América Latina, ocupada como estaba en la reconversión del Este europeo a la economía de mercado.

Las negociaciones entre los tres países miembros del TLCAN transcurrieron a lo largo de varios años. Los objetivos centrales eran, por una parte, reducir sus barreras al comercio y la inversión y, por la otra, diseñar y poner en marcha un mecanismo de solución de controversias. Dos acuerdos paralelos, uno sobre medio ambiente y otro relativo al trabajo, fueron introducidos por la administración Clinton buscando con ello, más que un replanteamiento de lo que el gobierno republicano de George Bush padre había aceptado durante las tratativas, el establecimiento de una impronta demócrata.

El Tratado entró en vigor el primero de enero de 1994; una fecha más en los calendarios canadiense y estadounidense, una fatal en el del vecino sureño: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hacía su irrupción en Chiapas y le declaraba la guerra al Estado mexicano. Se iniciaba así para México uno de los peores años de su historia reciente. Al bono del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que eventualmente lo convertiría en el segundo exportador en importancia para la principal economía del mundo y el cuarto para Canadá, había que restarle el zapatismo; el asesinato del candidato del partido oficialista a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio; el del Secretario General de ese partido (PRI), José Francisco Ruiz Massieu; y, hacia el final de ese mismo año, la devaluación del peso y las graves dificultades a las que debió enfrentarse la sociedad mexicana.

A pesar de ello, la matemática del TLCAN arrojó resultados positivos. Por un lado, la asociación con Estados Unidos facilitó el arreglo financiero que México necesitaba y el país pudo salir de su crisis en un tiempo récord. Ese apoyo y la puesta en marcha de severas reformas macroeconómicas, permitieron que a mediados de 1996 México estuviera listo para retomar la ruta del crecimiento, aunque debe reconocerse que el costo social del ajuste fue enorme. Por el otro, desde la puesta en marcha del Tratado, en 1994, el comercio total entre México, Estados Unidos y Canadá se ha expandido tanto que es demostrable que los tres países negocian entre sí un millón doscientos mil dólares por minuto.

Tan sólo las exportaciones de México a Estados Unidos se han triplicado desde 1994, alcanzando en el 2003 los 147 mil millones de dólares. De igual manera, las importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos que antes del TLCAN eran de 45 mil millones de dólares, en la actualidad representan 105 mil millones. Con ello, la balanza comercial bilateral pasó de 98 mil millones de dólares a más de 250 mil millones revirtiendo su situación deficitaria para generar un superávit comercial cercano a los 42 mil millones de dólares.

Respecto a Canadá, desde la entrada en vigor del TLCAN las exportaciones mexicanas pasaron de 1,500 millones de dólares a más de 8,000 millones en el 2003. En tanto que las importaciones provenientes de ese país sumaron en el 2003, 4,120 millones de dólares, cuando diez años atrás éstas eran de 1,175 millones.

Dado que junto con la expansión del comercio otro objetivo del TLCAN es la atracción de inversiones que contribuyan a la generación de empleos, resalta el hecho de que a partir de 1994 y a medida que el Tratado se fue consolidando el país fortaleció su certidumbre jurídica, aumentando la confianza para el establecimiento de negocios, lo que le ha permitido captar importantes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED).

De hecho, en los últimos diez años México se ha colocado como el cuarto destino para la IED entre los países en desarrollo; segundo en América Latina; e incluso el año pasado fue el primero de la región. En el periodo 1994-2003 la IED acumulada sumó 142,500 millones de dólares.

Para México, Estados Unidos representa la principal fuente de IED. Entre 1994 y 2003, las más de 15,500 empresas con capital estadounidense en el país invirtieron alrededor de 81,000 millones de dólares. Por lo que toca a Canadá, sus más de 1,400 empresas invirtieron alrededor de 4,500 millones de dólares en ese mismo período, ubicando a ese país como el tercer generador de IED en México.

Pero el TLCAN no ha sido benéfico únicamente para México y sus socios cuyas economías han sido capaces de generar empleo productivo, que si bien ha estado fundamentalmente vinculado a la industria exportadora de cada una de las tres naciones, ha pagado salarios superiores en promedio a los devengados en el sector manufacturero. Debido a su ubicación geográfica como puente entre las dos mitades del Continente Americano, México ha buscado facilitar la entrada de terceros países a Norteamérica. El hecho de que cuente con 12 acuerdos de libre

comercio que lo vinculan institucionalmente con 43 naciones ubicadas en distintas partes del planeta es una muestra importante no sólo del compromiso de México con el comercio, al cual considera una máquina de crecimiento, sino también con la colectividad de los países a los que se encuentra vinculado.

Por ejemplo, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio que México firmara con la Unión Europea las exportaciones pasaron de 2,788 millones de dólares en 1993 a 5,591 millones en 2003, en tanto que las importaciones se expandieron de 7,798 millones de dólares a 17,861 millones.

En el caso de América Latina, pese a que el conjunto de los tratados de libre comercio firmados por México aún dejan mucho que desear, con la excepción de Chile, país con el que existe un acuerdo de última generación, el comercio se expande igualmente, alentado por esfuerzos que aun y cuando son incompletos representan una sólida vocación diversificadora, latinoamericanista y pro integración.

En resumen, la vinculación comercial de México con prácticamente todas las regiones del mundo; su experiencia adquirida tanto en las negociaciones de los diversos acuerdos de libre comercio como en el marco de su puesta en marcha; los flujos de inversión extranjera directa que además de capitales ha traído consigo transferencia de tecnología y nuevos métodos de administración empresarial; y su pertenencia a diversos organismos de cooperación económica internacional, son factores que han contribuido a que en los últimos 20 años México participe activamente de las corrientes financieras y comerciales internacionales, consolidando la estabilidad macroeconómica construida luego de las crisis financieras de 1982 y 1994.

Sería un error concluir a partir del panorama anteriormente descrito que México no tiene aún importantes retos por conquistar, el más urgente tal vez el de corregir la pésima distribución de ingreso que ha caracterizado la instalación del modelo

neoliberal en el país. Sin embargo, no puede negarse que cuando se cuenta con el respiro que otorga una macroeconomía ordenada y funcional, existe una ventana de oportunidad para reflexionar acerca de los aspectos sociales que integran la agenda de lo pendiente. El desafío principal consiste en no desaprovecharla.

A manera de conclusiones

Parecería imposible concluir este esfuerzo de síntesis que ha buscado analizar algunos aspectos de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos así como entre las propias naciones latinoamericanas, llegando incluso a plantear la posibilidad de una bisagra que como México vincula al norte y al sur de nuestro Hemisferio, sin hacer una referencia al que parece el tema central que respalda varias de las apreciaciones aquí vertidas y que puede resumirse tal vez en una pregunta: ¿hasta dónde son reales tanto la vocación como la voluntad de nuestras naciones para forjar esa patria grande que soñaron nuestros visionarios próceres?

Nuestros países, que han sido capaces de ceder soberanía incluso ante organismos financieros internacionales que en ocasiones lejos de comprender y solidarizarse con situaciones delicadas nos agobian con presiones, lamentablemente no siempre han sabido cumplir con sus compromisos integracionistas. Pareciera que nos cuesta trabajo tomar más en serio nuestro regionalismo. Pareciera que a pesar de que nuestra América Latina fue pionera en materia de integración, hoy hemos perdido liderazgo ante otras regiones, incluso África. Pareciera, por lo tanto, que tenemos por delante una tarea que, aunque titánica, debe ser emprendida con renovada vitalidad.

Debemos introducir contenido político y social a todos nuestros esfuerzos de integración económica; debemos expandirlos en su integralidad; y debemos, sobre todo, dotarlos de instituciones que apuntalen esos esfuerzos así como de mecanismos oportunamente ratificados por nuestros parlamentos, si queremos

generar una mística integradora regional que permita que los sueños dejen de serlo y se conviertan en realidades contundentes.

En ese sentido, creo necesario destacar que la presente coyuntura, caracterizada por una cierta indiferencia de Estados Unidos y de Europa hacia América Latina, paradójicamente parecería ofrecernos la posibilidad para consolidarnos como región. Para armar un auténtico modelo integrador latinoamericano que abarque, entre otros aspectos, el comercio, la inversión, la generación de empleo digno, la cooperación macroeconómica y financiera, el desarrollo de estrategias productivas comunes, la defensa de nuestros ecosistemas, la solución pacífica de nuestras controversias, y la convergencia hacia una política exterior común que defienda los intereses regionales. En pocas palabras, una oportunidad para tomar verdaderamente en serio nuestro regionalismo y construirlo sobre los aspectos que ineludiblemente nos vinculan: nuestro pasado común, nuestras culturas milenarias, nuestros valores compartidos, nuestro origen eminentemente ibérico, y porque no decirlo, hasta nuestras raíces idiomáticas.

México ha puesto desde hace tiempo su mirada en el Sur, convencido de que su acercamiento a esa mitad de nuestro Hemisferio puede ser el pilar sobre el cual descansa un proyecto latinoamericano de gran envergadura. Un proyecto que no parte de cero porque retoma los avances logrados en la última década del siglo pasado, y a los que ya se ha hecho referencia. Un proyecto que demuestre que están equivocados quienes no conciben a México fuera de la órbita de Estados Unidos. Quienes señalan que México y Centroamérica constituyen parte del cinturón de seguridad estadounidense y no merecen, por ello, un proyecto propio. Quienes asumen cierta la lamentable idea de que América Latina es simplemente el patio trasero de Estados Unidos y que su destino está por ello subordinado a esa potencia.

De validar esa visión, tendríamos que asumir igualmente que en los momentos que hoy nos toca presenciar, caracterizados por una agenda internacional que

pone especial énfasis en la seguridad y el combate al terrorismo, América Latina tendría como único signo, mirar en la dirección que Estados Unidos mira y acompasar sus esperanzas a un ritmo no sólo exógeno sino hegemónico, y esto es, desde mi punto de vista, inaceptable.

Permítanme manifestar mi convicción de que nos toca a los latinoamericanos imaginar y construir nuestro propio destino, aun si nos enfrentamos a límites constreñidos por una realidad internacional que nos abruma. Estoy igualmente cierta que los latinoamericanos debemos avanzar hacia una integración regional planificada, venciendo innegables dificultades internas y externas aunque no sea más que por conveniencia propia: debemos evitar a toda costa que en la nueva geopolítica del siglo XXI, caracterizada por un poder omnímodo, por bloques poderosos, por potencias emergentes como China e India, América Latina se convierta en la periferia de la periferia.

Al igual que sucede con las leyes de la física donde un centro de gravedad atrae a los cuerpos circundantes, en el concierto de las naciones la vecindad es, en principio, la fuerza de atracción que genera las regiones. Existe, sin embargo, una enorme diferencia entre un accidente geográfico y aquellas decisiones que se apoyan en opciones políticas. La de no convertir a una región en fortaleza es, probablemente, tan difícil como necesaria. México se integró a esa región que tiene nombres distintos: Norteamérica cuando se le define geográficamente, NAFTA o TLCAN cuando se le da un contenido integracionista, pero mantiene su identidad latinoamericana apoyándose permanentemente en los valores y las tradiciones que compartimos.

Ya vimos que años atrás, desde México surgió un movimiento político inicialmente denominado Grupo de Contadora que devino en el Grupo de Río y que ha sido capaz de construir soluciones latinoamericanas y concertar posturas sobre diversos temas regionales e internacionales. Hoy, desde el sur, el MERCOSUR

está llamado a completar ese proceso, convirtiéndose en el arquitecto que dé sentido económico a esa unidad política iniciada hace más de veinte años.

No puede soslayarse que pese a que ese pensamiento se afianza entre los sectores políticos, económicos, sociales y culturales de nuestros países, también existen quienes se niegan a acompañar una mayor y más profunda integración de América Latina. Son los que ponen en duda que la integración es el impulso necesario para generar otras políticas que van más allá del comercio y la inversión, y se dirigen a cuestiones sociales, institucionales y hacia otras que le dan sentido y estabilidad al ejercicio integracionista. Son aquellos que se quedan en los linderos del análisis honesto y que hacen señalamientos diversos, como por ejemplo que la diversificación de los contactos económicos internacionales de América Latina no tiene futuro; o que algunos de nuestros países que ya tienen vínculos comerciales institucionales con Estados Unidos o con la Unión Europea no otorgan la prioridad debida a su inserción latinoamericana.

Como si todas esas cuestiones pudieran reducirse única y exclusivamente a números y porcentajes. Como si esa fotografía, tomada hoy, reflejara una opción indiscutible y permanente. Como si esto definiera el hoy y el mañana y nos negara toda posibilidad de modificación, cancelando así nuestro derecho a optar por un diseño que tal vez puede no ser cien por ciento diferente, pero que vale la pena intentar cuando las metas siguen siendo, hoy como ayer, la apertura, la multipolaridad, y, sobre todo, la afirmación de nuestra identidad latinoamericana.